

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Felipe Lizama Allende, en representación de la **Universidad de Santiago de Chile**, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N°20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra del **Consejo para la Transparencia (CPLT)**, representado por su Director General David Ibaceta Medina, por la decisión final dictada en el amparo por acceso a la información Rol C611-23, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.355 de 27 de abril de 2023.

Señala que el 13 de diciembre de 2022, Cecilia Derpich Canessa solicitó a su representada la siguiente información: *“Haciendo uso de la Ley de Transparencia solicito conocer las actividades académicas que ha desarrollado la señora Elisa Loncon durante los último 5 años (2018-2022) como académica de la Universidad de Santiago, indicando si ha realizado cursos de pregrado o postgrado, de cuantas horas, así como el detalle de la publicación de papers o estudios publicados por la universidad o en el marco de su actividad docente o de investigación.”*, agregando en sus observaciones: *“De haber realizado cursos, se solicita una lista con nombre del curso, Facultad, año y cantidad de horas”*, requerimiento de información que fue contestado mediante oficio N°17 de 11 de enero de 2023.

Indica que con fecha 17 de enero de 2023, la solicitante dedujo ante el Consejo para la Transparencia amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento, en virtud de la oposición de un tercero. El Consejo admitió a tramitación dicho amparo, y previo traslado conferido, con fecha 27 de febrero de 2023, su representada evacuó descargos y observaciones, señalando que la información requerida forma parte de los datos personales de una de sus académicas, la Dra. Elisa Loncón Antileo, y que la misma académica señora Loncón señaló mediante correo electrónico dirigido a la universidad, que se oponía a la entrega de la información solicitada, atendido a que la solicitud de acceso a la información afectaría sus derechos, acogiéndose, en consecuencia, a la prerrogativa establecida en el artículo 20 de la Ley N°20.285.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEDBXMFXKWP

Finalmente, con fecha 27 de abril de 2023, el Consejo para la Transparencia emitió decisión en el amparo, acogiénolo, y ordenando, en lo pertinente: *“Hacer entrega al reclamante de la información requerida, según fuere consignado en el punto N°1 de lo expositivo, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N°19.628, y del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.”*

En cuanto a los fundamentos de derecho para acoger el reclamo interpuesto, en primer lugar, alega infracción al artículo 40 de la Ley N°20.285, por falta del quórum requerido para decidir, ya que la decisión pronunciada por el Consejo para la Transparencia fue efectuada por dos de sus miembros, en circunstancias que dicha disposición señala expresamente que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros...”* siendo estos *“...cuatro consejeros designados por el Presidente de la República...”* Asimismo, se expresó en la decisión que un consejero -el señor Navarrete- manifestó su voluntad de abstención.

En segundo lugar, alega infracción al artículo 2° de la Ley N°18.575 y al artículo 13 de la Ley N°19.880, ya que en las decisiones del Consejo para la Transparencia deben observarse los procedimientos y no asilarse en principios genéricos para la sujeción al derecho, como lo exige, igualmente, el artículo 2° de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En tercer lugar, y citando el artículo 13 de la Ley N°19.880, precisa que la ausencia de quórum para decidir es un vicio de procedimiento, vicio de carácter esencial ya que es un requisito de la decisión, por mandato de la ley, y que genera perjuicio a su representada.

En cuarto lugar, refiere que la decisión impugnada se realizó fuera de la competencia del Consejo para la Transparencia, y sin cumplir las formalidades que prescribe la ley, pues ésta exige que el Consejo emita sus



pronunciamientos concurriendo la voluntad de, al menos, tres de sus integrantes y, en este caso, tal decisión fue adoptada solo por dos de ellos, lo que conduce irremisiblemente a la ineficacia/ilegalidad/nulidad del acuerdo, conforme al artículo 7° de la Constitución.

En quinto lugar, señala que la decisión impugnada, a mayor abundamiento, es ilegal por haberse pronunciado uno de los órganos administrativos llamados a su conocimiento con anterioridad a la misma, afectando el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley N°19.880, en relación con los artículos 52, 53 y 62, todos ellos de la Ley N°18.575, ello por cuanto uno de los dos Consejeros que concurrieron al acuerdo, el señor Francisco Leturia Infante, Presidente del Consejo para la Transparencia, emitió opinión ante la prensa mucho antes de pronunciarse en el acuerdo, configurándose un pronunciamiento anticipado, sin ponderar los antecedentes de su representada, lo que afecta la imparcialidad en la decisión de fondo.

Por lo expuesto, pide acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto, y declarar: 1. Que la decisión de amparo Rol C611-23 del Consejo para la Transparencia carece de validez, dado que fue dictada por dos de los miembros del Consejo, en circunstancias que el artículo 36 de Ley N°20.285 exige claramente que tales pronunciamientos sean adoptados por la mayoría de sus integrantes, es decir, a lo menos tres de ellos, situación que no se verificó en el procedimiento administrativo. 2. Que se deje sin efecto lo dispuesto por el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo Rol C611-23, en lo referido a completar la información requerida, y obligación de informar el cumplimiento de las medidas establecidas por dicha institución.

Segundo: Que, evacuando traslado por el reclamado **Consejo para la Transparencia**, comparece su Director General Suplente y representante legal, don David Ibaceta Medina, abogado, quien solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad deducido.

Haciendo una relación de los antecedentes y alegaciones efectuadas por la reclamante, hace presente que no es un hecho controvertido la naturaleza pública de la información que el Consejo ordenó entregar.

Manifiesta que la Decisión de Amparo C611-23 no contraviene el artículo 40 de la Ley de Transparencia, ni vulnera el artículo 7° de la



Constitución, ni ninguna otra normativa aplicable a la materia, y hace presente que el Consejero Bernardo Navarrete Yáñez, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del amparo, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido. Luego, precisa que la abstención para votar y participar en la discusión por parte del Consejero señor Navarrete Yáñez, no quiere decir que la decisión sea nula, ya que es la propia Ley de Transparencia que se encarga de aclarar el asunto en sus artículos 40 y 41, por cuanto encontrándose inhabilitado un consejero, éste sí puede concurrir a efectos de formar el quórum exigido, ya que el legislador estableció los requisitos para adoptar sus decisiones y para sesionar en acápites separados. Por lo demás, el artículo 16 inciso final de los Estatutos del Consejo, establecen claramente que *“Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar.”*

En cuanto a la alegación consistente en que el Consejero señor Francisco Leturia debía inhabilitarse, no fue invocada por la reclamante en sus descargos en sede administrativa, por lo que la decisión impugnada no incurrió en ilegalidad alguna al no haberse pronunciado respecto a ella, ya que no formó parte de la controversia, precluyendo el derecho de la reclamante a alegar ex post dicha circunstancia. El examen de legalidad que debe efectuar el Ilmo. Tribunal se sujeta a lo obrado ante el Consejo, no resultando posible juzgar la legalidad de lo resuelto, sobre la base de argumentos nuevos que no formaron parte de la controversia. Sin perjuicio de lo anterior, recalca que, de todas formas, en la especie no existe inhabilidad alguna del Consejero señor Leturia, pues en el artículo de prensa referido, el Presidente del Consejo únicamente hizo presente una reiterada jurisprudencia administrativa en materia de información relativa al personal que trabaja para la Administración del Estado y que es pedida por medio de la Ley de Transparencia



Sostiene que la información ordenada proporcionar a la solicitante es de carácter pública, y constituyen antecedentes directamente relacionados con el ejercicio de la función pública, lo cual permite a la ciudadanía conocer antecedentes relacionados con el ejercicio de dichas funciones de las personas que trabajan para un órgano de la Administración del Estado, en cuyo ejercicio se encuentran sujetos a los principios de probidad y publicidad establecidos en el artículo 8° incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C611-23 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, por lo cual solicita tener por evacuado informe y por efectuados los descargos y observaciones al reclamo de ilegalidad deducido, y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, rechazarlo en su totalidad, con expresa condena en costas, resolviendo mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C611-23.

Tercero: Que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone que *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*. En nuestro ordenamiento jurídico, es la Ley N° 20.285 (también Ley de Transparencia o LT), la que regula el ejercicio del derecho al acceso de información, en su artículo 1° que dispone “el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. Es así que el artículo 21



numeral 1° de la Ley de Transparencia previene que “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes: *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*”.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia señala que el acceso a la información comprende el derecho a acceder a toda aquella *“elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”* y la letra e) del artículo 3° del Reglamento de la Ley de Transparencia, define “documentos” como *“Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquellos”*.

Cuarto: Que, en el caso *sub lite*, no se ha controvertido que la información sea pública y la reclamante funda su ilegalidad en concurrir una causal de nulidad de derecho público por la falta de quórum para adoptar la decisión, invocando el artículo 40 de la Ley de Transparencia que, en lo pertinente, dispone que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate resolverá el Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento”*.

Por su parte, el artículo 41 de la señalada ley dispone que los Estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento, las cuales están contenidas en el Decreto Supremo N° 20 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, en cuyo artículo 9° inciso primero señala que *“El Consejo Directivo requerirá para sesionar un quórum mínimo de 3 consejeros y adoptará sus decisiones por la mayoría. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. El artículo 16° inciso final de los referidos estatutos dispone: “Los Consejeros que deban*



abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar”.

Quinto: Que, de lo razonado precedentemente, fluye la decisión materia del recurso fue pronunciada por dos consejeros, su Presidente don Francisco Leturia Infante y la Consejera doña Natalia González Bañados dejándose constancia que al Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, le afectaba causal de inhabilidad, por existir circunstancias que le restaban imparcialidad para sesionar, pudiendo concluirse que la decisión de amparo no adolece del vicio denunciado, en cuanto la sesión se inició con tres consejeros y la decisión se adoptó con el voto favorable de dos de ellos, pues en ese caso constituyen mayoría de los integrantes no inhabilitados.

Sexto: Que, en relación con las protestas de la reclamante en orden a que el Consejero señor Francisco Leturia debía inhabilitarse, queda de manifiesto en autos que ello no fue alegado por la reclamante en sus descargos en sede administrativa, por lo que la decisión impugnada no incurrió en ilegalidad alguna al no haberse pronunciado respecto a ella, ya que no formó parte de la controversia, por lo que esta Corte comparte con el CPLT que ha precluido el derecho de la reclamante a alegar ex post dicha circunstancia.

En efecto, el examen de legalidad que debe efectuar esta Corte, se sujeta a lo obrado ante el CPLT, no resultando posible juzgar la legalidad de lo resuelto, sobre la base de argumentos nuevos que no formaron parte de la controversia, sin perjuicio de lo cual el acuerdo adoptado en la Decisión de Amparo es plenamente válido ya que el Consejero Leturia se abstuvo en los términos expresados precedentemente, habiendo solo concurrido para efectos de constituir el quorum exigido por la normativa, adoptándose la Decisión el quorum y mayorías exigidos para que dicha Decisión de Amparo sea válido.

Así las cosas, la alegación en análisis, al no haber sido efectuada en sede administrativa será desestimada, toda vez que de ser admitida, se estaría afectando el principio de la congruencia procesal.

Séptimo: Que, conforme lo antes expuesto y razonado, al no verificarse las ilegalidades denunciadas por la actora, se desestimaré en todas sus parte el reclamo deducido en la especie.







Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile en contra de la Decisión de Amparo Rol C611-23, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.355 de 27 de abril de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Vidaurre.

Contencioso Administrativo N° 302-2023.-

No firma la ministra señora Durán Madina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

<div></div> <div>Fernando Antonio Valderrama Martínez Ministro(S) Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:02 UTC-3</div> <div></div>	<div></div> <div>Bárbara Vidaurre Miller Abogado Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:13 UTC-3</div> <div></div>
--	---



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEDBXMFXKWP

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEDBXMFXKWP

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Felipe Lizama Allende, en representación de la **Universidad de Santiago de Chile**, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N°20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra del **Consejo para la Transparencia**, representado por su Director General David Ibaceta Medina, por la decisión final dictada en el amparo por acceso a la información Rol C1743-23, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.372 de 20 de julio de 2023.

Señala que el 13 de diciembre de 2022, Cristián Torres Fernández solicitó a su representada la siguiente información: *“La académica de su institución Elisa Loncón ha sido beneficiada con 1 año sabático en base a su jerarquía académica y trabajos/publicaciones que ha realizado. Agradecería que me puedan detallar los cursos que ha dictado en los últimos 5 años y las publicaciones, papers o trabajos relevantes que ha producido en ese mismo periodo y que justifiquen el beneficio otorgado”*, requerimiento de información que fue contestado mediante oficio N°57 de 13 de febrero de 2023.

Indica que con fecha 16 de febrero de 2023, el solicitante dedujo ante el Consejo para la Transparencia amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento, en virtud de la oposición de un tercero. El Consejo admitió a tramitación dicho amparo, y previo traslado conferido, con fecha 11 de abril de 2023, su representada evacuó descargos y observaciones, detallando la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y sobre la oposición del tercero, se adjuntó copia de la misma que contiene sus datos de contacto, y en la cual la señora Loncón manifestó *“no entregaré la información solicitada a través de la oficina de transparencia, y me acojo a lo establecido en el Art. 21° N°2 de la Ley 20.285. La solicitud se inserta en un contexto de ataques en redes sociales, donde lo que menos importa es la transparencia; ello afecta a mi integridad personal”*.

Finalmente, con fecha 20 de julio de 2023, el Consejo para la Transparencia emitió decisión en el amparo, acogéndolo, y ordenando, en lo pertinente: *“Entregue al reclamante información sobre los cursos que ha*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: H MSSXMGXKWP

dictado en los últimos 5 años y las publicaciones, papers o trabajos relevantes que ha producido en ese mismo periodo, doña Elisa Loncón, y que justifiquen el otorgamiento del beneficio que indica, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el número de cedula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N°19.628, y del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.”

En cuanto a los fundamentos de derecho para acoger el reclamo interpuesto, en primer lugar, alega infracción al artículo 40 de la Ley N°20.285, por falta del quórum requerido para decidir, ya que la decisión pronunciada por el Consejo para la Transparencia fue efectuada por dos de sus miembros, en circunstancias que dicha disposición señala expresamente que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros...”* siendo estos *“...cuatro consejeros designados por el Presidente de la República...”* Asimismo, se expresó en la decisión que un consejero -el señor Navarrete- manifestó su voluntad de abstención.

En segundo lugar, alega infracción al artículo 2° de la Ley N°18.575 y al artículo 13 de la Ley N°19.880, ya que en las decisiones del Consejo para la Transparencia deben observarse los procedimientos y no asilarse en principios genéricos para la sujeción al derecho, como lo exige, igualmente, el artículo 2° de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En tercer lugar, y citando el artículo 13 de la Ley N°19.880, precisa que la ausencia de quórum para decidir es un vicio de procedimiento, vicio de carácter esencial ya que es un requisito de la decisión, por mandato de la ley, y que genera perjuicio a su representada.

En cuarto lugar, se refiere al principio de jerarquía normativa, y citando en artículo 16 del Decreto Supremo N°20 de 2009, de la Secretaría General de la Presidencia, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, afirma que dicha disposición es una norma de



naturaleza reglamentaria, por lo que siempre debe primar la norma de mayor jerarquía que, en el caso, es aquella establecida en el artículo 40 de la Ley N°20.285. Así, no puede pretenderse que la inhabilidad declarada por el Consejero Bernardo Navarrete Yáñez tenga efectos parciales; uno para adoptar la decisión y otro para la instalación legal de dicho órgano colegiado, por lo que no puede entenderse que se dio cumplimiento al quórum exigido para tomar una decisión, en los términos establecidos en la ley.

En quinto lugar, expresa que la decisión impugnada se realizó fuera de la competencia del Consejo para la Transparencia, y sin cumplir las formalidades que prescribe la ley, lo que conduce irremisiblemente a la ineficacia/ilegalidad/nulidad del acuerdo, conforme al artículo 7° de la Constitución, pues la ley exige que el Consejo emita sus pronunciamientos concurriendo la voluntad de, al menos, tres de sus integrantes y, en el caso de autos, tal decisión fue adoptada solo por dos de ellos.

Por lo expuesto, pide acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto, y declarar: 1. Que la decisión de amparo Rol C1743-23 del Consejo para la Transparencia carece de validez, dado que fue dictada por dos de los miembros del Consejo, en circunstancias que el artículo 36 de Ley N°20.285 exige claramente que tales pronunciamientos sean adoptados por la mayoría de sus integrantes, es decir, a lo menos tres de ellos, situación que no se verificó en el procedimiento administrativo. 2. Que se deje sin efecto lo dispuesto por el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo Rol C1743-23, en lo referido a completar la información requerida, y obligación de informar el cumplimiento de las medidas establecidas por dicha institución.

Segundo: Que, evacuando traslado por el reclamado **Consejo para la Transparencia**, comparece su Director General Subrogante y representante legal, Gastón Avendaño Silva, quien solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad deducido.

Haciendo una relación de los antecedentes y alegaciones efectuadas por la reclamante, hace presente que no es un hecho controvertido la naturaleza pública de la información que el Consejo ordenó entregar.

Manifiesta que la Decisión de Amparo C1743-23 no contraviene el artículo 40 de la Ley de Transparencia, ni vulnera el artículo 7° de la Constitución, ni ninguna otra normativa aplicable a la materia, y hace



presente que el Consejero Bernardo Navarrete Yáñez, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del amparo, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido. Luego, precisa que la abstención para votar y participar en la discusión por parte del Consejero señor Navarrete Yáñez, no quiere decir que la decisión sea nula, ya que es la propia Ley de Transparencia que se encarga de aclarar el asunto en sus artículos 40 y 41, por cuanto encontrándose inhabilitado un consejero, éste sí puede concurrir a efectos de formar el quórum exigido, ya que el legislador estableció los requisitos para adoptar sus decisiones y para sesionar en acápites separados. Por lo demás, el artículo 16 inciso final de los Estatutos del Consejo, establecen claramente que *“Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar.”*

Sostiene que la información ordenada proporcionar al solicitante es de carácter publica, y constituyen antecedentes directamente relacionados con el ejercicio de la función pública, lo cual permite a la ciudadanía conocer antecedentes relacionados con el ejercicio de dichas funciones de las personas que trabajan para un órgano de la Administración del Estado, en cuyo ejercicio se encuentran sujetos a los principios de probidad y publicidad establecidos en el artículo 8° incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C1743-23 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, por lo cual solicita tener por evacuado informe y



por efectuados los descargos y observaciones al reclamo de ilegalidad deducido, y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, rechazarlo en su totalidad, con expresa condena en costas, resolviendo mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C1743-23.

Tercero: Que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone que *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*. En nuestro ordenamiento jurídico, es la Ley N° 20.285 (también Ley de Transparencia o LT), la que regula el ejercicio del derecho al acceso de información, en su artículo 1° que dispone el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. Es así que el artículo 21 numeral 1° de la Ley de Transparencia previene que *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia señala que el acceso a la información comprende el derecho a acceder a toda aquella *“elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”* y la letra e) del artículo 3° del Reglamento de la Ley de Transparencia, define “documentos” como *“Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquellos”*.



Cuarto: Que, en el caso *sub lite*, no se ha controvertido que la información sea pública y la reclamante funda su ilegalidad en concurrir una causal de nulidad de derecho público por la falta de quórum para adoptar la decisión, invocando el artículo 40 de la Ley de Transparencia que, en lo pertinente, dispone que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate resolverá el Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento”*.

Por su parte, el artículo 41 de la señalada ley dispone que los Estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento, las cuales están contenidas en el Decreto Supremo N° 20 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, en cuyo artículo 9° inciso primero señala que *“El Consejo Directivo requerirá para sesionar un quórum mínimo de 3 consejeros y adoptará sus decisiones por la mayoría. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. El artículo 16° inciso final de los referidos estatutos dispone: “Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar”*.

Quinto: Que, de lo razonado precedentemente, fluye la decisión materia del recurso fue pronunciada por dos consejeros, su Presidente don Francisco Leturia Infante y la Consejera doña Natalia González Bañados dejándose constancia que al Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, le afectaba causal de inhabilidad, por existir circunstancias que le restaban imparcialidad para sesionar, pudiendo concluirse que la decisión de amparo no adolece del vicio denunciado, en cuanto la sesión se inició con tres consejeros y la decisión se adoptó con el voto favorable de dos de ellos, pues en ese caso constituyen mayoría de los integrantes no inhabilitados.

Sexto: Que, de lo antes expuesto y razonado, es factible concluir que la información ordenada entregar por el CPLT es pública, que dicha información no se encuentra encuadrado en alguna de las causales de reserva o secreto de la LT, y que la Decisión de Amparo impugnada se adoptó en sesión válidamente constituida y por la mayoría requerida en la



normativa no se observa ilegalidad alguna en el acto impugnado, por lo que se desestimará el reclamo deducido.





Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile en contra de la Decisión de Amparo Rol C1743-23 adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.372 de 20 de julio de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Vidaurre.

Contencioso Administrativo N°507-2023.

No firma la ministra señora Durán Madina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

<div></div> <div>Fernando Antonio Valderrama Martínez Ministro(S) Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:02 UTC-3</div> <div></div>	<div></div> <div>Bárbara Vidaurre Miller Abogado Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:13 UTC-3</div> <div></div>
---	--

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HMSSXMGXKWP

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Felipe Lizama Allende, en representación de la **Universidad de Santiago de Chile**, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N°20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra del **Consejo para la Transparencia**, representado por su Director General David Ibaceta Medina, por la decisión final dictada en el amparo por acceso a la información Rol C557-23, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.372 de 20 de julio de 2023.

Señala que el 7 de diciembre de 2022, Alberto Barros Bordeu solicitó a su representada la siguiente información: *“información respecto del número e identidad de profesores del cuerpo docente de la Universidad de Santiago que se encuentran con permiso sabático remunerado; y la lista de profesores que han recibido ese beneficio en los últimos tres años”*, requerimiento de información que fue contestado mediante oficio N°13 de 11 de enero de 2023.

Indica que con fecha 16 de enero de 2023, el solicitante dedujo ante el Consejo para la Transparencia amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento, en virtud de la oposición de un tercero. El Consejo admitió a tramitación dicho amparo, y previo traslado conferido, con fecha 12 de mayo de 2023, su representada evacuó descargos y observaciones, detallando la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y sobre la oposición del tercero, señalando que *“se dedujo oposición, indicando que su publicidad afectaría sus derechos, acorde a lo establecido en el artículo 21, N°2, de la Ley 20.285, acogiéndose, por lo tanto, al derecho de oposición de terceros establecido en el artículo 20 de la misma ley. Dicha negativa se adjunta al presente oficio. (...) De esta forma, la Universidad de Santiago de Chile, se ve impedida de divulgar la información requerida. (...) Finalmente, (...) entregamos los datos de contacto de los/as funcionarios/as, para que se realice la respectiva notificación, los cuales se derivan de los antecedentes adjuntos a este Oficio”*.

Finalmente, con fecha 20 de julio de 2023, el Consejo para la Transparencia emitió decisión en el amparo, acogiéndolo, y ordenando, en lo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KEBZXMHXKWP

pertinente: *“Entregue al reclamante información respecto del número e identidad de profesores del cuerpo docente de la Universidad de Santiago que se encuentran con permiso sabático remunerado; y la lista de profesores que han recibido ese beneficio en los últimos tres años.”*

En cuanto a los fundamentos de derecho para acoger el reclamo interpuesto, en primer lugar, alega infracción al artículo 40 de la Ley N°20.285, por falta del quórum requerido para decidir, ya que la decisión pronunciada por el Consejo para la Transparencia fue efectuada por dos de sus miembros, en circunstancias que dicha disposición señala expresamente que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros...”* siendo estos *“...cuatro consejeros designados por el Presidente de la República...”* Asimismo, se expresó en la decisión que un consejero -el señor Navarrete- manifestó su voluntad de abstención.

En segundo lugar, alega infracción al artículo 2° de la Ley N°18.575 y al artículo 13 de la Ley N°19.880, ya que en las decisiones del Consejo para la Transparencia deben observarse los procedimientos y no asilarse en principios genéricos para la sujeción al derecho, como lo exige, igualmente, el artículo 2° de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En tercer lugar, y citando el artículo 13 de la Ley N°19.880, precisa que la ausencia de quórum para decidir es un vicio de procedimiento, vicio de carácter esencial ya que es un requisito de la decisión, por mandato de la ley, y que genera perjuicio a su representada.

En cuarto lugar, se refiere al principio de jerarquía normativa, y citando en artículo 16 del Decreto Supremo N°20 de 2009, de la Secretaría General de la Presidencia, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, afirma que dicha disposición es una norma de naturaleza reglamentaria, por lo que siempre debe primar la norma de mayor jerarquía que, en el caso, es aquella establecida en el artículo 40 de la Ley N°20.285. Así, no puede pretenderse que la inhabilidad declarada por el Consejero Bernardo Navarrete Yáñez tenga efectos parciales; uno para adoptar la decisión y otro para la instalación legal de dicho órgano colegiado, por lo que no puede entenderse que se dio cumplimiento al quórum exigido para tomar una decisión, en los términos establecidos en la ley.



En quinto lugar, expresa que la decisión impugnada se realizó fuera de la competencia del Consejo para la Transparencia, y sin cumplir las formalidades que prescribe la ley, lo que conduce irremisiblemente a la ineficacia/ilegalidad/nulidad del acuerdo, conforme al artículo 7° de la Constitución, pues la ley exige que el Consejo emita sus pronunciamientos concurriendo la voluntad de, al menos, tres de sus integrantes y, en el caso de autos, tal decisión fue adoptada solo por dos de ellos.

Por lo expuesto, pide acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto, y declarar: 1. Que la decisión de amparo Rol C557-23 del Consejo para la Transparencia carece de validez, dado que fue dictada por dos de los miembros del Consejo, en circunstancias que el artículo 36 de Ley N°20.285 exige claramente que tales pronunciamientos sean adoptados por la mayoría de sus integrantes, es decir, a lo menos tres de ellos, situación que no se verificó en el procedimiento administrativo. 2. Que se deje sin efecto lo dispuesto por el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo Rol C557-23, en lo referido a completar la información requerida, y obligación de informar el cumplimiento de las medidas establecidas por dicha institución.

Segundo: Que, evacuando traslado el tercero interesado **Alberto Barros Bordeu**, abogado, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad presentado por la Universidad de Santiago de Chile.

Expresa que el reclamo deducido, sin buscar controvertir el carácter público de la información requerida, construye una supuesta falta de quórum de la Decisión del Consejo, concluyendo que la inhabilitación de uno de los tres consejeros en funciones que debía concurrir a la Decisión impedía al Consejo adoptar una resolución sobre el amparo discutido en autos. Sin embargo, afirma que dicha interpretación es artificiosa y pretende desconocer la norma expresa que regula la materia: el artículo 16 del Decreto Supremo N°20 de 2009, de la Secretaría General de la Presidencia, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, que en lo pertinente expresa: “Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar.”

Refiere que la reclamante primero desconoce la norma, y luego la menciona únicamente para observar que su jerarquía normativa la haría



irrelevante para resolver la supuesta controversia, argumentación que desconoce el tenor expreso de la legislación aplicable y el régimen normativo con el que ha funcionado y funciona no solo el Consejo, sino una gran cantidad de órganos administrativos colegiados del ordenamiento jurídico, que en normas de distinta naturaleza contemplan las disposiciones necesarias para el funcionamiento del órgano y para la adecuada ejecución de las funciones que les son encomendadas.

Hace presente que la Decisión impugnada no es como la presenta la reclamante, una decisión anómala producto del acuerdo de dos consejeros, sino una decisión consistente con la jurisprudencia de transparencia a la que han concurrido distintos y numerosos consejeros con sus votos.

Tercero: Que, evacuando traslado por el reclamado **Consejo para la Transparencia**, comparece su Director General Suplente y representante legal, David Ibaceta Medina, quien solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad deducido.

Haciendo una relación de los antecedentes y alegaciones efectuadas por la reclamante, sostiene que el reclamo de ilegalidad resulta inconducente, habiendo perdido oportunidad procesal desde el momento en que la misma reclamante entrega en su reclamo la información que se dispuso en la decisión de amparo. Así, hace presente que el reclamo de ilegalidad consiste en que se declare la ilegalidad de la decisión que ordena la entrega del número de identidad de profesores del cuerpo docente de la Universidad de Santiago que se encuentran con permiso sabático remunerado, sin embargo, en la página 9 del libelo de ilegalidad la misma Universidad de Santiago de Chile entrega 3 links a través de los cuales es posible conocer dicha información, dando cumplimiento a la decisión de amparo Rol C557-23.

En subsidio de lo anterior, expresa que la Decisión de Amparo C557-23 no contraviene el artículo 40 de la Ley de Transparencia, ni vulnera el artículo 7° de la Constitución, ni ninguna otra normativa aplicable a la materia, y hace presente que el Consejero Bernardo Navarrete Yáñez, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del amparo, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, es



decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido. Luego, precisa que la abstención para votar y participar en la discusión por parte del Consejero señor Navarrete Yáñez, no quiere decir que la decisión sea nula, ya que es la propia Ley de Transparencia que se encarga de aclarar el asunto en sus artículos 40 y 41, por cuanto encontrándose inhabilitado un consejero, éste sí puede concurrir a efectos de formar el quórum exigido, ya que el legislador estableció los requisitos para adoptar sus decisiones y para sesionar en acápite separados. Por lo demás, el artículo 16 inciso final de los Estatutos del Consejo, establecen claramente que *“Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar.”*

Sostiene que la información ordenada proporcionar al solicitante es de carácter pública, y constituyen antecedentes directamente relacionados con el ejercicio de la función pública, lo cual permite a la ciudadanía conocer antecedentes relacionados con el ejercicio de dichas funciones de las personas que trabajan para un órgano de la Administración del Estado, en cuyo ejercicio se encuentran sujetos a los principios de probidad y publicidad establecidos en el artículo 8° incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C557-23 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, por lo cual solicita tener por evacuado informe y por efectuados los descargos y observaciones al reclamo de ilegalidad deducido, y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, rechazarlo en su totalidad, con expresa condena en costas, resolviendo mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C557-23.



Cuarto: Que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone que *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*. En nuestro ordenamiento jurídico, es la Ley N° 20.285 (también Ley de Transparencia o LT), la que regula el ejercicio del derecho al acceso de información, en su artículo 1° que dispone el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. Es así que el artículo 21 numeral 1° de la Ley de Transparencia previene que *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia señala que el acceso a la información comprende el derecho a acceder a toda aquella *“elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”* y la letra e) del artículo 3° del Reglamento de la Ley de Transparencia, define “documentos” como *“Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquellos”*.

Quinto: Que, en el caso *sub lite*, no se ha controvertido que la información sea pública y la reclamante funda su ilegalidad en concurrir una causal de nulidad de derecho público por la falta de quórum para adoptar la decisión, invocando el artículo 40 de la Ley de Transparencia que, en lo



pertinente, dispone que *“El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate resolverá el Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento”*.

Por su parte, el artículo 41 de la señalada ley dispone que los Estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento, las cuales están contenidas en el Decreto Supremo N° 20 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia, en cuyo artículo 9° inciso primero señala que *“El Consejo Directivo requerirá para sesionar un quórum mínimo de 3 consejeros y adoptará sus decisiones por la mayoría. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. El artículo 16° inciso final de los referidos estatutos dispone: “Los Consejeros que deban abstenerse serán considerados para los efectos de determinar el quórum requerido para sesionar”*.

Sexto: Que, de lo razonado precedentemente, fluye la decisión materia del recurso fue pronunciada por dos consejeros, su Presidente don Francisco Leturia Infante y la Consejera doña Natalia González Bañados dejándose constancia que al Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, le afectaba causal de inhabilidad, por existir circunstancias que le restaban imparcialidad para sesionar, pudiendo concluirse que la decisión de amparo no adolece del vicio denunciado, en cuanto la sesión se inició con tres consejeros y la decisión se adoptó con el voto favorable de dos de ellos, pues en ese caso constituyen mayoría de los integrantes no inhabilitados

Séptimo: Que, de lo antes expuesto y razonado, es factible concluir que la información ordenada entregar por el CPLT es pública, que dicha información no se encuentra encuadrado en alguna de las causales de reserva o secreto de la LT, y que la Decisión de Amparo impugnada se adoptó en sesión válidamente constituida y por la mayoría requerida en la normativa, por lo que no se observa ilegalidad alguna en el acto impugnado, razón por la cual se desestimaré el reclamo deducido.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile en contra de la Decisión de Amparo Rol C557-23







adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N°1.372 de 20 de julio de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Vidaurre.

Contencioso Administrativo N° 508-2023.-

No firma la ministra señora Durán Madina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

<div></div> <div>Fernando Antonio Valderrama Martínez Ministro(S) Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:02 UTC-3</div> <div></div>	<div></div> <div>Bárbara Vidaurre Miller Abogado Corte de Apelaciones Veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro 10:13 UTC-3</div> <div></div>
---	--



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KEBZXMHXKWP

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

